

Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo

Maria Clemencia Ramírez

Bogotá: ICANH, 2001

Juan Guillermo Ferro Medina

Profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana

EL LIBRO DE MARÍA CLEMENCIA Ramírez es de enorme utilidad para todas las personas que están interesadas en la problemática de los movimientos sociales en zonas de conflicto armado. En este texto están planteadas con detalle las enormes contradicciones del Estado colombiano, de la guerrilla y, sobre todo, del movimiento social en la región del Putumayo.

Desde el punto de vista metodológico, este libro deja ver un prolongado y valioso trabajo de campo, un esfuerzo admirable y paciente por recoger sistemáticamente y con especial detalle un

número muy significativo de importantes testimonios de los diferentes actores clave, lo cual lleva al lector a que en algunos momentos se sienta en medio de los acontecimientos. De igual manera, la revisión bibliográfica y conceptual es traída al texto con oportunidad, y sin otra pretensión que la de contribuir a una mejor interpretación de los hechos y de los discursos. Desde el punto de vista del énfasis disciplinario, si bien el eje parece ser la antropología social (identidad y reconocimiento social), el texto es un excelente ejemplo de interdisciplinariedad dentro de las ciencias sociales y humanas. El estudio desarrolla de forma articulada tanto a nivel teórico como empírico una serie de temas y preocupaciones clave para la historia

(procesos de poblamiento territorial), la sociología (por qué se da la acción colectiva) y la ciencia política (cómo se construye ciudadanía, fronteras entre el Estado y la sociedad civil).

El evento sobre el que está centrado el análisis es el fenómeno de las marchas de los campesinos cocaleros del Putumayo, que tuvieron lugar a mediados de 1996, y las cuales movilizaron decenas de miles de campesinos durante varias semanas y que, sobre todo, hicieron evidente el enorme problema social y político que se esconde detrás de los llamados cultivos ilícitos. Este hecho es de singular importancia para los propósitos de la autora puesto que, en el proceso de las marchas y de las negociaciones, los intereses y las contradicciones

fundamentales de los principales actores involucrados en el conflicto salieron a flote con más claridad. De esta manera, el amplio espectro de intereses políticos en juego fue expuesto públicamente.

Los testimonios que recoge María Clemencia Ramírez muestran con insistencia cómo la lucha del movimiento campesino cocalero es ante todo una “batalla” por su reconocimiento como actor social legítimo. Para este propósito se plantean varios elementos importantes. Primero, el rechazo a la estigmatización. Las declaraciones de los líderes reflejan la enorme indignación de los campesinos cuando se les acusa de delincuentes. Para ellos su actividad es legítima en la medida en que es el fruto de su propio trabajo (desde la lógica campesina, lo que sí está muy mal visto es aprovecharse del trabajo de los otros), y de su lucha por la sobrevivencia familiar ante la carencia de otras oportunidades económicas. En segundo lugar, el derecho a participar en las decisiones que los afectan. Hay una clara conciencia de que las políticas del Estado central se elaboran y se ejecutan sin su consentimiento, en particular las que más los afectan en la actualidad, como son las de erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos. Finalmente, la demostración de que se tiene un proyecto propio e integral de desarrollo rural y regional. Los campesinos manifiestan que el futuro de su territorio los afecta profundamente. Ellos consideran que tienen mucho conocimiento que aportar al diseño de un modelo de desarrollo sostenible y democrático para el Putumayo, y que esta propuesta no es la misma que plantea la insurgencia.

En síntesis, la autora nos muestra que la lucha de los campesinos cocaleros es lo que algunos autores han llamado el *derecho a tener derechos* o, en palabras de los propios

campesinos, su intención es la de *poder ser reconocidos como ciudadanos putumayenses*.

La enorme disposición de pruebas sobre todos los propósitos anteriores es una fortaleza especial de este trabajo de investigación. Hay un esfuerzo lúcido y sistemático por analizar y recoger “las verdaderas intenciones del movimiento”. Esta tarea se remonta a la historia del movimiento social del Putumayo, mucho antes de las marchas de 1996. El trabajo, si bien se centra en este evento, tiene una importante base histórica del proceso de la colonización y del esfuerzo por construir región en el Putumayo. Igualmente, el texto tiene la virtud de que el análisis no concluye con el fin de las negociaciones entre el Estado y los marchistas, sino que continúa recogiendo todos los efectos posteriores que, por cierto, aportan muchas luces adicionales sobre lo que realmente estaba en disputa.

Desde mi punto de vista, el debate que plantea este libro no está en el análisis del movimiento social y de su intencionalidad. Lo mismo podríamos decir de la visión que se recoge sobre la participación del Estado frente al evento de las marchas. El texto muestra en detalle –y con gran claridad– las enormes fisuras del Estado colombiano. Éstas quedan representadas en las contradicciones entre el estamento militar y los funcionarios civiles (Fuerzas Armadas *vs.* ministerios del Interior y de Agricultura, por ejemplo); entre las propias instituciones del nivel central (Red de Solidaridad *vs.* Plante, por ejemplo), entre éstas y las instituciones regionales y locales (Ministerio de Interior y FFAA *vs.* Gobernación y alcaldías, por ejemplo).

Para los analistas del Estado colombiano, esta aproximación es de una riqueza invaluable porque permite ver simultáneamente prácticas autoritarias y represivas, políticas

excluyentes y alta dependencia de la política norteamericana con propósitos conciliadores, identificación con la sociedad civil y búsqueda de legitimidad. Después de esta perspectiva tan bien documentada por María Clemencia Ramírez, va a ser muy difícil seguir sosteniendo visiones monolíticas sobre lo que es el Estado colombiano en su conjunto.

Ahora bien, en lo que se refiere al papel de las FARC y su relación con el movimiento cocalero, se puede proponer una discusión frente a los planteamientos de la autora. El libro pretende mostrar que las FARC manejan una gran ambigüedad con relación al papel del Estado. De esta manera, se presenta en algunos momentos a las FARC como coincidentes con el interés de los líderes campesinos con respecto a la idea de que el Estado debe cumplir con su deber de hacer presencia y de propiciar el desarrollo. Es decir, por momentos se visualiza a las FARC como el actor político que empuja a los campesinos en su proceso de búsqueda de incorporación al Estado.

Desde nuestra perspectiva, puede haber incluso algo de ingenuidad en esta visión. El interés de las FARC es múltiple. Por un lado, lo que persiguen es que los campesinos se den cuenta de que el Estado colombiano no los quiere y no los puede incorporar por su propia forma de concebir la democracia y el desarrollo, y porque se encuentra maniatado por la política antidrogas de Estados Unidos. Las FARC procuran que los campesinos vivan en carne propia la represión, pues éste es un valioso recurso “pedagógico” para aprender quién es el verdadero “enemigo”. Como el mismo texto lo documenta, la insurgencia no permite que posteriormente a las marchas se constituyan movimientos políticos legales encabezados por los líderes de las mismas. Abrir la

democracia liberal colombiana hace mucho tiempo dejó de ser la intención de las FARC. El incumplimiento del Estado a buena parte de los acuerdos pactados con los marchistas es celebrado por el movimiento guerrillero bajo la popular expresión de “yo se lo dije”. La inversión estatal es considerada como parte de los recursos que hay que utilizar contra él.

Actualmente, los proyectos productivos del Plan Colombia en el Putumayo (en buena parte recursos de Usaid), que se adelantan en las fincas de los campesinos que erradicaron parcialmente la coca, son vistos por la insurgencia como un recurso temporal de seguridad alimentaria que los campesinos necesitan para sobrevivir ante los cambios drásticos sufridos en el mercado de la coca, los cuales son fruto del conflicto mismo y de las fumigaciones. Es decir, estos proyectos no son vistos como la concreción del pago de una deuda social histórica sino como los “dulces” que permiten entretener a la población mientras las cosas mejoran por otro lado.

Pese a estas diferencias sobre el análisis de este actor armado, lo que

es muy importante resaltar, en concordancia con la autora, es que en las zonas de abierto conflicto, el movimiento social campesino está profundamente bloqueado. Las posibilidades de emancipación para el movimiento social en el actual contexto de la guerra colombiana son realmente muy limitadas. Los pocos que han avanzado políticamente han tenido que asumir también unos altos costos políticos, son los llamados “pactos paradójicos” que Francisco Gutiérrez Sanín nos revela sobre las contradicciones de los movimientos sociales que negocian con los diversos actores armados en Colombia. Y si a eso añadimos los asesinatos de importantes líderes campesinos a manos de los paramilitares, como sucedió en este caso pocos meses después de las marchas, el panorama no es nada alentador.

Este libro deja ver que las marchas y sus negociaciones fueron una de las tantas coyunturas de oportunidad perdidas para el proceso de construcción de la democracia colombiana. El Estado, pese a algunos intentos en cabeza de la Red de Solidaridad, finalmente desaprovechó la oportunidad, por

un lado, de crear una alianza política prácticamente inédita entre el Estado y el movimiento colonocampesino, y por otro, de ampliar las contradicciones entre este movimiento y la insurgencia. En lo que se refiere a la guerrilla, el texto muestra claramente cómo ésta, desde su lógica autoritaria, termina por cortar las alas a un movimiento profundamente revolucionario, ya que no sólo estaba poniendo en evidencia las profundas contradicciones de la política de erradicación y sustitución, sino, sobre todo, porque con su práctica y con sus planteamientos estaba creando una nueva forma de hacer política. En términos de Arturo Escobar, podríamos decir que se trataba de un movimiento que a través de su política cultural pretendía generar una nueva cultura política basada en la construcción de ciudadanía democrática.

En síntesis, y dentro de la diversidad propia de nuestro conflicto, el Estado finalmente se portó como la guerrilla quería, y viceversa: la guerrilla se portó como el Estado quería. Aunque suene paradójico, en Colombia se le teme mucho más a la democracia que a la guerra.